



La Sombra Larga: 2020, El Coronavirus y América Latina

The Long Shadow: 2020, The Coronavirus and Latin America

MSc. PÁVEL ALEMÁN BENÍTEZ

Investigador Auxiliar, CIPI

e-mail:pavel@cipi.cu

Numero ORCID:0000-0002-0715-228

RESUMEN:

El contagio del coronavirus SARS-CoV2 comenzó hace casi un año cuando se identificó este virus en la ciudad china de Wuhan. A diferencia de siglos anteriores, en que las enfermedades contagiosas se transformaron en epidemias devastadoras pero asincrónicas en su presencia a escala global, por los límites que las distancias y las barreras geográficas imponían, la interconexión global permitió su rápida progresión. La economía mundial se encontraba en una crisis reforzada por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y la República Popular China. Pero la paralización de la vida cotidiana y la disminución del transporte ante la rápida expansión del coronavirus, no sólo agravó la crisis económica preexistente, sino que ha impactado profundamente en nuestros hábitos que trascienden a la política. El efecto ha sido multiplicado en la periferia global y en particular en América Latina que se volvió el epicentro de la pandemia. Y esto ha complejizado el contexto latinoamericano, que ya tenía agravada su conflictividad social y política desde finales de 2019. **Palabras clave:** Coronavirus, América Latina, crisis económica, políticas públicas, política.

Abstract:

The spread of the SARS-CoV2 coronavirus began almost a year ago when this virus was identified in the Chinese city of Wuhan. Unlike previous centuries, when contagious diseases became devastating epidemics but asynchronous in their presence on a global scale, due to the limits imposed by distances and geographical barriers, global interconnection allowed for their rapid progression. The world economy was in a crisis reinforced by trade tensions between the United States and the People's Republic of China. But the paralysis of daily life and the decrease in transportation due to the rapid expansion of the coronavirus, not only aggravated the pre-existing economic crisis, but has deeply impacted our habits that transcend politics. The effect has been multiplied in the global periphery and particularly in Latin America which became the epicenter of the pandemic. And this has made the Latin American context more complex, which had already aggravated its social and political conflict since the end of 2019.

Key words: Coronavirus, Latin America, economic crisis, public policies, politics.

INICIOS DE PARTIDA: LAS MALAS NOTICIAS

El año 2020 va a ser recordado tristemente en la historia de la civilización. Por siglos muchas enfermedades contagiosas adquirieron notoriedad por su mortalidad y la incapacidad de poder brindar un tratamiento efectivo para su cura. La evolución humana, de su conocimiento, capacidades científicas y tecnológicas, así como de sus sistemas sanitarios han provisto tratamiento para muchas de ellas, al punto que algunas suelen encontrarse sólo en las referencias históricas o en los libros de Medicina. Muchas hipótesis, algunas de ellas derivadas de la paranoia y de ciertas teorías de la conspiración acreditaron el origen del coronavirus SARS-CoV2 a la combinación de segmentos de ARN viral para el desarrollo de armas biológicas. La mayor parte de los científicos que han opinado sobre el tema han negado tales suposiciones.

Sin embargo, hay otras cuestiones más tangibles. Antes de que comenzara a propagarse en Wuhan a finales de 2019, América Latina como región pasaba por un momento complejo respecto a la economía global. Y no pocos países tuvieron significativos procesos de movilización social que tenían entre algunas similitudes la protesta contra los efectos de la aplicación de políticas económicas neoliberales. Entre otras, destaca la reducción del gasto público en los servicios de salud, una parte de los cuales es privado.

Siendo honestos, ninguna sociedad estaba preparada para lidiar con la propagación y agresividad de una pandemia como la de este coronavirus. Ni siquiera todos asumieron la misma actitud. Algunos países como Suecia asumieron la teoría de la inmunidad de rebaño, cuya eficacia está aún en duda al menos en lo concerniente a esta enfermedad. La gran mayoría se vieron ante la necesidad de tomar medidas de aislamiento social y paralización de la vida cotidiana, incluido sectores de la actividad económica (turismo; servicios; transporte público y privado, incluido el transporte aéreo civil y el naval; minería y extrativismo energético; y remesas) cuyos indicadores

parecen señalar la quiebra de muchas empresas y en otros casos la necesaria intervención de los Estados para evitar que desaparezcan.

Otra dimensión menos evidente pero que ya comienza a asomarse como punta de iceberg es la competencia entre institutos de investigación, transnacionales y Estados, no sólo para obtener ingresos con la venta de equipos médicos, accesorios contra el riesgo biológico y vacunas. La competencia entre potencias por disponer a la mayor brevedad de candidatos vacunales (algunos países con más de uno), abre otro campo de batalla en la geopolítica mundial, fundamentalmente entre Estados Unidos, la Federación Rusa y la República Popular China. Incluso una nación como la República Popular Democrática de Corea ha optado por mostrar otra arista: la importancia de cerrar oportunamente y controlar sus fronteras como forma eficaz de impedir la propagación del virus en su territorio. De hecho, la pandemia del SARS-CoV2 debe ser también vista como reflejo de una de las dimensiones de la seguridad humana: la seguridad biológica. Y sin dudas ha de haber sido percibida por sus implicaciones para la salud, la economía y la política como un factor que afecta la seguridad nacional de los Estados.

No obstante, las peculiaridades de esta pandemia no afectan sólo la salud y la economía, no sólo conciernen a las disputas globales, sino que impactan profundamente en la política. América Latina como una región de extrema desigualdad en términos de ingresos y de acceso a los servicios, con un acumulado explosivo de conflictos sociales, cuenta ahora con otro elemento que puede influir en los realineamientos políticos del continente.

MEMORIA A CORTO PLAZO: EL COMPLEJO ENTORNO POLÍTICO LATINOAMERICANO DE FINALES DE 2019

En octubre del pasado año el clima político latinoamericano se estremeció con tres procesos de movilización y protesta social importante. En apariencias estos tres procesos no eran conexos entre

sí, pero reflejaban el rechazo a políticas de ajuste económico, fuera por acumulación o por retorno a su empleo. Nos referimos al poderoso estallido social en Ecuador, Chile y Colombia. Igualmente, la inestabilidad social y la protesta ciudadana también se expresaba en Bolivia tras el golpe que interrumpió el mandato de Evo Morales, tras haber ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Y, por si fuera poco, el ya inestable escenario político peruano mostraba señales de una agria disputa entre fuerzas representadas en el Congreso y el presidente que había asumido recomponer la resquebrajada institucionalidad. En los 4 primeros casos, el aparato de coacción y coerción estatal fue duramente empleado para reprimir las manifestaciones, con un saldo importante de vidas y un costo político elevado en términos de legitimidad.

¿Pero cómo se llega a tal estado de cosas?

En el caso de Ecuador, una pésima gestión económica por parte del gobierno de Lenin Moreno, en medio de una situación global de caída de los precios del petróleo, llevó a un paquete de medidas (Decreto Ejecutivo 883) que resultaron demasiado agravantes para una sociedad cuya economía doméstica estaba al límite. Mal debe haberle sentado al pueblo ecuatoriano, la decisión gubernamental de implementar un grupo de medidas coherentes con los acuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional en marzo de 2019. De todas ellas las más chocantes eran la eliminación de los subsidios los combustibles, liberando los precios de la gasolina extra y del diésel, lo que derogaba una política de más de cuatro décadas; y la reducción de las vacaciones anuales pagadas de 30 a 15 días, así como la flexibilización de la contratación laboral. Paradójicamente, estas medidas iban acompañadas con las reducciones de impuestos al sector productivo y a ciertas importaciones, con lo cual el Estado perdía parte de su capacidad para aumentar sus ingresos fiscales. 12 días de protestas, 11 muertos, centenares de detenidos, y un uso injustificado y desmedido de

la violencia fue la respuesta estatal antes de derogar el impopular decreto.

Debe aclararse el matiz de corte clasista de estas medidas, pero en particular de la supresión de los subsidios a la gasolina, con la que el Estado dejaba de erogar 1 500 millones de dólares estadounidenses (USD). El diésel es empleado fundamentalmente por el transporte de carga y el transporte público, lo que concentraba 1 170 millones de la cifra anteriormente mencionada. La medida afectaría a los propietarios de vehículos privados en los 330 millones restantes. Como sostiene Pablo Ospina, “el gobierno decidió que el 75% más pobre de la población que usa el transporte público, debía pagar 78% del costo de la eliminación del subsidio, mientras que el 25% más rico de la población debía pagar el 22% restante” (Ospina Peralta, 2020: 38).

La respuesta del gobierno de Lenin Moreno no se limitó al empleo de los cuerpos de seguridad para reprimir, sino que intentó descalificar a los sectores de la sociedad que mostraban su descontento. No sólo criminalizó la protesta social, sino que intentó crear divisiones entre los manifestantes. “Paralelamente a esta violencia, presente desde el inicio con la proclamación del estado de excepción, el Gobierno intentó dividir a los actores entre la creación de un enemigo interno (los dirigentes y militantes de la Revolución Ciudadana) y los actores legítimos con los cuales se podía dialogar: los transportistas y el movimiento indígena con los cuales la estrategia fue sectorializar las demandas” (Le Quang, Chávez, & Vizuite, 2020: 78). Inculpar a Correa y sus partidarios de ser los responsables de aquellas jornadas de protesta ha tenido como efecto *boomerang* que hoy sean la fuerza política con mayores posibilidades ante las próximas elecciones.

Chile pasó también por un mes de octubre cargado de mucha protesta y violencia estatal, con una prolongación temporal y en sus efectos. De tal manera, el aumento del pasaje en el metro público de Santiago de Chile, fue la gota que colmó la copa

de 30 años de aplicación de políticas neoliberales ‘en democracia’. La sociedad chilena cuestionó a todas las fuerzas políticas (tanto a la derecha de la UDI y Renovación Nacional, como aquellas que han estado en la Concertación) por su responsabilidad en la aplicación de políticas económicas socialmente regresivas bajo el amparo de un sistema jurídico cuyo pilar es la Constitución aprobada en la época de Pinochet. El ataque e incendio a las propias instalaciones del metro de Santiago de Chile no debe ser entendido de manera superficial como un acto de vandalismo, sino como el ataque a una representación del sistema.

La represión desatada por las fuerzas policiales y armadas radicalizó y expandió socialmente la protesta que habían comenzado los estudiantes. El empleo de tácticas para discapacitar visualmente a los manifestantes (más de 300 manifestantes perdieron uno o ambos ojos por disparos de proyectiles) y la violencia sexual, conllevó a la erosión de la aprobación de la gestión del gobierno de Sebastián Piñera. Esto se expresó no sólo en la salida de funcionarios de alto rango, sino en un dilatado proceso de diálogo cuyo resultado final será una nueva Constitución Política. La convulsión social ha alcanzado incluso a cuestionar el rol del sistema político en la conducción del debate sobre la forma en que debe ser conformada la Asamblea Constituyente.

En Colombia, en octubre de 2019, el Centro Democrático, fuerza política que articula el respaldo al gobierno de Iván Duque, había perdido las elecciones regionales en la capital Bogotá, pero también en Cali y Medellín. Esta última es una derrota esencial para el uribismo, que ha perdido terreno ya en varias elecciones regionales en su propia cuna. A los reclamos por los proyectos de pensiones y reforma laboral y tributaria, se unió el tema de la violencia política, ejercida por las fuerzas armadas de forma abiertamente escandalosa.

La masacre de un grupo de menores en un operativo militar contrainsurgente fue el detonador más poderoso para que comenzaran masivas pro-

testas en noviembre de dicho año. En Colombia, uno de los temas de trasfondo en la conflictividad social es el incumplimiento sostenido de las obligaciones del Estado para hacer viable los acuerdos de paz alcanzados con las FARC-EP. A la falta de garantías para la seguridad y la reinserción social de los ex combatientes, se sumó el expansivo control territorial y los desplazamientos humanos que provoca el paramilitarismo y el asesinato o desaparición de líderes sociales. El mayor fracaso es que una facción disidente haya retomado las armas.

En diciembre del propio año, pese a la protesta social el gobierno de Iván Duque empleó a fondo sus articulaciones legislativas para aprobar la llamada Ley de Crecimiento. Esta al igual que otras similares en la región proviene de una matriz económica neoliberal. Como han destacado algunas fuentes, las reducciones tributarias implican “la pérdida de ingresos para el Estado, debido a las numerosas exenciones fiscales que plantea, que pueden suponer una merma de hasta un 6,6% del PIB.” (Rodríguez Pinzón, 2020) Golpeando económicamente a los sectores más desfavorecidos y a la clase media, el gobierno colombiano se quedó ante un escenario de contracción del gasto público y con menor capacidad de solventar políticas públicas que cumplieran su cometido de satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

UN VIRUS QUE AGRAVA LA CRISIS PREEXISTENTE

¿Fue una sorpresa la llegada del coronavirus a América Latina? ¿Estaba preparada la región para asumir semejante reto?

En un mundo interconectado globalmente, con una parte importante de su comercio orientado hacia el exterior, era lógico pensar que la pandemia del SARS-CoV2 llegaría rápidamente al territorio latinoamericano. En ocasiones olvidamos que la capacidad de respuesta ante un reto de semejante naturaleza depende en gran medida, no sólo del establecimiento oportuno de políticas públicas de contención y mitigación. El

gasto público orientado a fortalecer los sistemas sanitarios con personal capaz y en las proporciones adecuadas, dotados de la infraestructura necesaria, es parte de las condiciones de posibilidad que definen tanto como la conducta societal ante una pandemia, el menor costo humano posible y la brevedad con la que se amortiguan los efectos de la pandemia.

En los últimos años la economía latinoamericana venía sufriendo una desaceleración progresiva como consecuencia de la crisis económica global, la contracción de las adquisiciones de materias primas por parte de la República Popular China y las incertidumbres derivadas de las tensiones provocadas por la guerra comercial entre ese país y Estados Unidos, así como cierto nivel de desacople entre ambas economías. En otras palabras: un ciclo donde la

balanza comercial se vio fuertemente afectada tanto por la disminución de las exportaciones como de las importaciones de bienes y servicios, aunque hay diferencias por subregiones y países. (Tabla 1)

Una evaluación de la CEPAL observaba un modesto aumento del volumen de las exportaciones entre el primer y el segundo semestres de 2019, antes de la crisis desatada por el coronavirus. Pero este crecimiento “no alcanzaría a contrarrestar la caída de los precios, en tanto que las importaciones se contraerían tanto en volumen como en precio (...) Los envíos de América del Sur experimentarían una contracción muy superior al promedio regional (6,7%) y reducciones tanto de los volúmenes exportados como de los precios. En ello influye el estancamiento económico por el que atraviesa la subregión” (CEPAL, 2019: 73).

TABLA 1. Comparativo del comercio de bienes 2017-2019

América Latina y el Caribe: Evolución del valor del comercio de bienes 2017-2019^a
(en porcentajes)

Región / Subregión / Países	Exportaciones			Importaciones		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
América Latina y el Caribe	11,5	8,3	-2,0	8,0	11,2	-3,0
América Latina	11,6	8,4	-2,1	8,7	11,3	-3,0
América del Sur	13,8	7,6	-6,7	9,7	13,5	-6,9
Mercado Común del Sur (MERCOSUR)	12,7	6,2	-7,7	10,0	14,2	-10,4
Argentina	0,9	5,1	5,9	19,6	-2,5	-18,9
Brasil	17,8	10,0	-5,6	9,9	21,0	-0,5
Paraguay	8,3	3,1	-8,8	17,7	12,2	-8,5
Uruguay	10,1	6,3	4,0	2,4	5,2	-10,4
Venezuela (República Bolivariana de)	5,8	-14,8	-49,9	-21,8	23,6	-60,2
Comunidad Andina	17,3	10,3	-3,9	8,6	11,1	-0,3
Bolivia, E.P.	10,8	9,5	-2,7	9,3	8,5	-2,4
Colombia	15,9	11,8	-4,3	2,3	12,1	2,7
Ecuador	12,6	12,8	3,8	21,7	15,9	0,0
Perú	22,1	8,0	-7,2	10,2	8,1	-3,6
Alianza del Pacífico	11,4	10,0	0,4	8,5	10,9	-0,3
Chile	14,0	9,6	-6,6	10,9	15,1	-5,6
México	-4,2	-1,8	2,8	-1,2	-2,1	0,5
Centroamérica	7,3	2,0	2,6	6,7	5,2	-2,1
Costa Rica	7,0	6,2	3,3	4,3	4,8	-3,0
El Salvador	7,9	1,5	3,5	6,1	12,2	3,3
Guatemala	5,1	-0,2	2,5	8,5	7,3	-0,2
Honduras	9,3	0,3	2,6	7,2	7,7	-5,1
Nicaragua	9,8	0,6	-3,0	3,6	-11,4	-9,6
Panamá (no incluye la Zona Libre Colón)	3,9	3,1	4,3	8,8	4,0	-2,9
Panamá (Zona Libre Colón)	0,3	3,6	-10,0	-0,2	6,1	-7,0

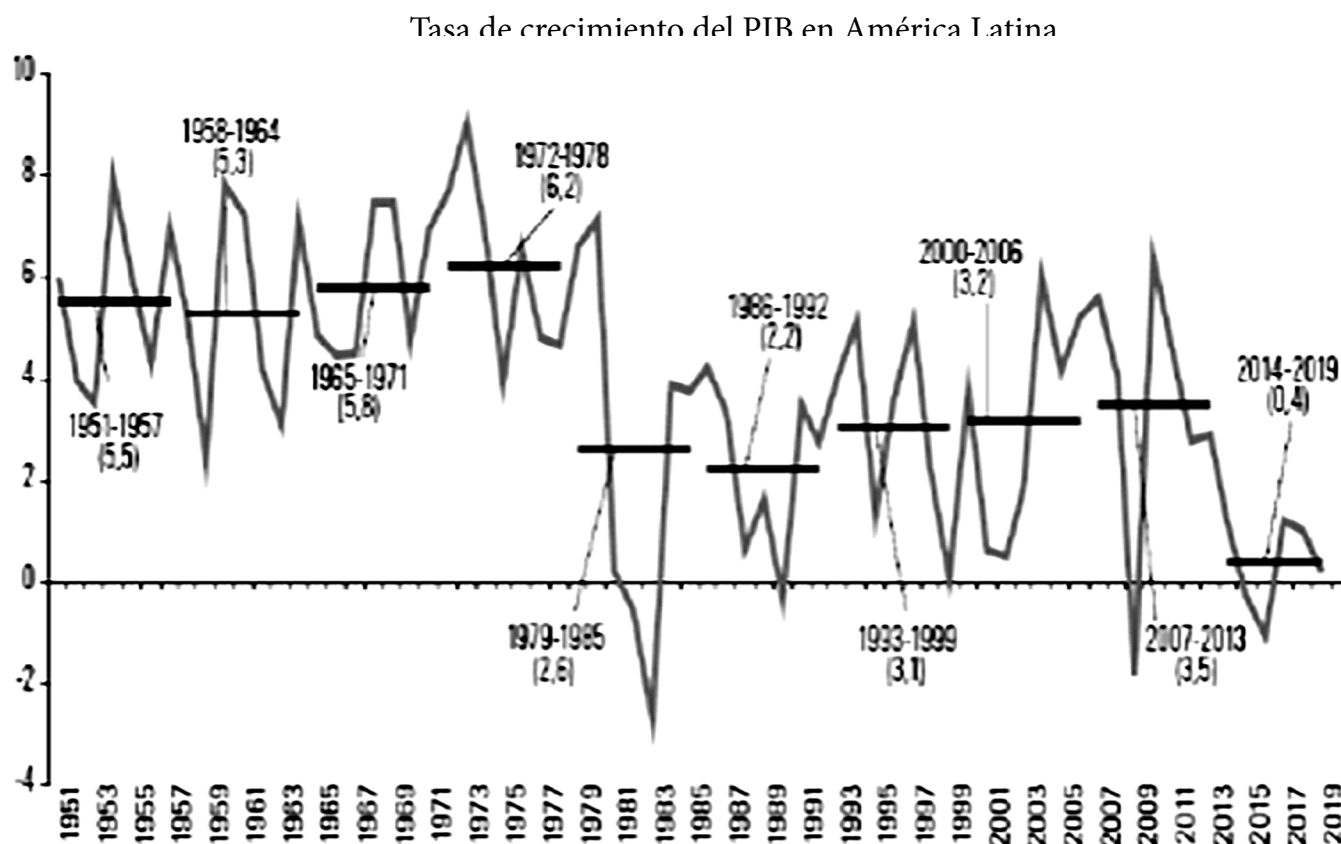
FUENTE: (CEPAL, 2019)

En muchos países de la región la renta nacional está fuertemente asociada a los ingresos externos que provienen de los sectores minero y el vinculado al extractivismo energético. Ambos han resultado muy perjudicados por la abrupta contracción de la demanda a escala global. Quizás el caso del petróleo muestra con toda la crudeza la gravedad del momento. Pese a sucesivos recortes de la oferta, pactados por los países miembros de la OPEP y algunos no miembros pero que son importantes suministradores de crudo al mercado mundial, a duras penas se ha podido estabilizar el mercado. Así que a duras penas se ha logrado estabilizar la cotización en una cota que ronda los 40 dólares estadounidenses por barril. Efectivamente, hasta las capacidades de almacenamiento se encuentran a tope y la mayoría de los productores de petróleo

vinculados a la fracturación hidráulica han tenido que cancelar sus operaciones porque los precios de referencia internacionales limitan la viabilidad económica de esta modalidad de explotación de hidrocarburos no convencionales.

Hay otros elementos relevantes, que nos permiten comprender el momento de debilidad que la economía de la región atravesaba justo antes de la pandemia del coronavirus SARS-CoV2. La tasa de crecimiento del PIB regional es la menor desde principios de los años 50 del pasado siglo. Con ello se combina la elevada deuda pública y el crecimiento de los pagos de la deuda y sus intereses. En la misma forma en que han crecido los pagos de la deuda externa han decrecido los gastos en inversiones y en el sector de la salud pública. (Ver Gráficos 1 y 2) CEPAL

GRÁFICO 1. América Latina y el Caribe: tasa de crecimiento del PIB real 1951-2019
(En porcentajes)



FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
sobre la base de cifras oficiales

GRÁFICO 2. América Latina (16 países): pago de intereses, gastos de capital y gasto en salud de gobiernos centrales (2010-2019) (En porcentajes del PIB)

FUENTE: CEPAL, 2020: 8-9

llama la atención que en algunos países el nivel de endeudamiento externo respecto al PIB, era un factor preexistente muy desfavorable, con impacto negativo en una etapa de pandemia. El aumento del gasto público (no sólo en términos de incremento del gasto en salud pública) para enfrentar una situación excepcional como la del impacto del SARS-CoV2 en las sociedades latinoamericanas, provocaría un nuevo endeudamiento externo. De ahí que sea importante que las instituciones financieras evalúen la posibilidad de renegociar los adeudos de varios países si quieren evitar su colapso. “Existe gran heterogeneidad entre países, mientras el Paraguay y el Perú tenían niveles de endeudamiento inferiores al 25% del PIB a finales de 2019, otros países presentaban niveles mucho mayores, que alcanzaban el 89,4% en la Argentina, el 75,8% en el Brasil y el 61,3% en Costa Rica. El peso de la deuda no solo es notorio en los gobiernos centrales,

sino también en las empresas públicas no financieras. (...) Una situación especialmente preocupante en materia de la carga del servicio de la deuda se da en los países centroamericanos y caribeños.” (CEPAL, 2020: 8-9)

Al reducirse de manera sensible los ingresos procedentes del comercio exterior, los ingresos fiscales y caer abruptamente de las remesas. (Sayeh, 2020: 16-19) (Ver Gráfico 3), también se redujo el gasto público, incluido el necesario para mantener unos servicios de salud con capacidad para gestionar y mitigar una crisis sanitaria como la provocada por el coronavirus SARS-CoV2. No se trata sólo de la infraestructura y de la tecnología, sino del personal médico y paramédico suficientes, capacitados y protegidos con los requerimientos de orden material necesarios para preservarse así mismo del riesgo biológico. Se incluye también la cantidad de camas hospitalarias asignadas para ingresos, particularmente en las

Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y ventiladores para respiración asistida. (Tabla 2-Serie)

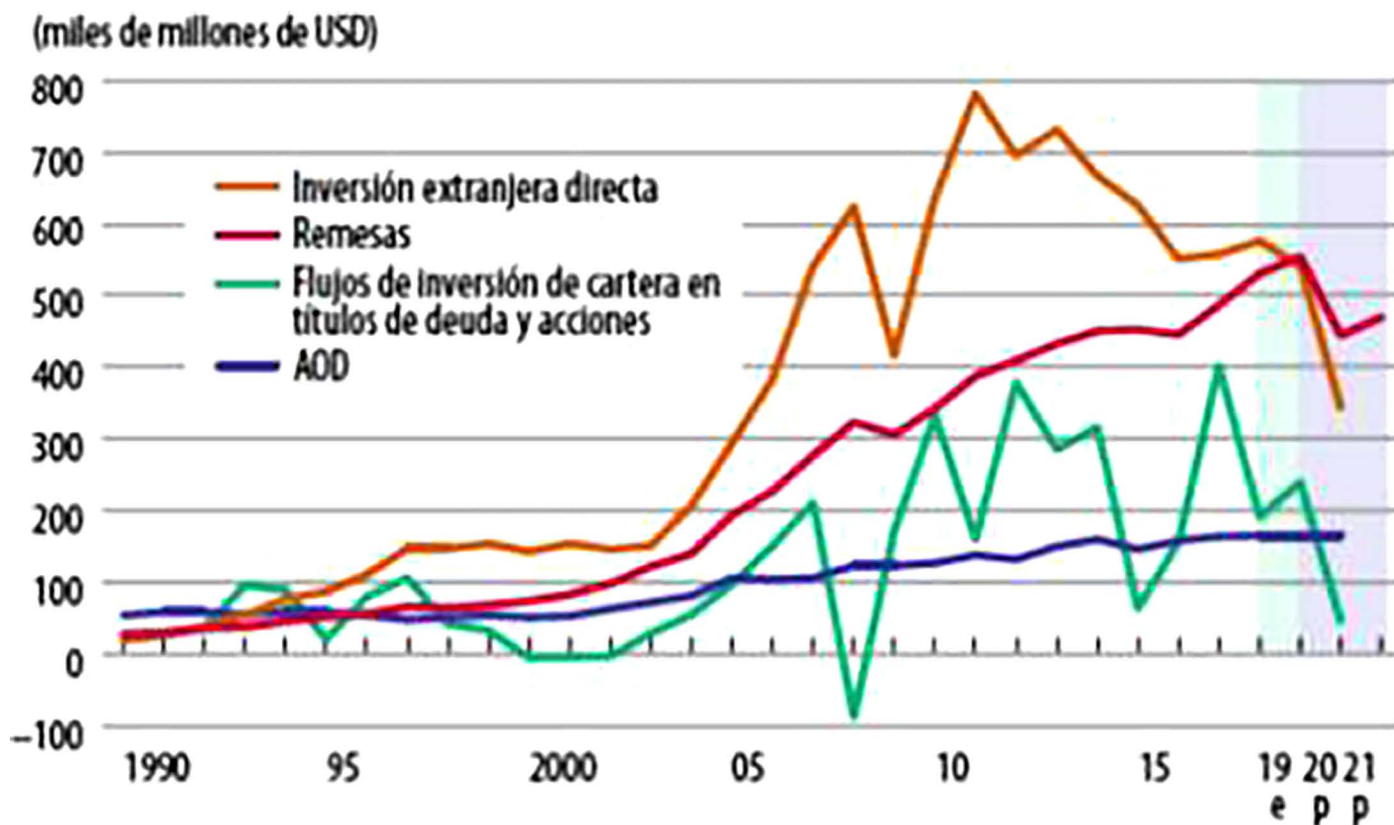
La rápida propagación de la pandemia en una región con una economía y servicios sanitarios debilitados tiene otros correlatos. La incertidumbre que generó la irrupción del SARS-CoV2 encontró disminuida la propia capacidad de respuesta de los gobiernos, que se encontraron en la disyuntiva de paralizar sus economías domésticas para proteger a sus ciudadanos o mantener cierto dinamismo social y económico a costa de la vida de ellos. Se percibe que varios países adoptaron tardíamente medidas de respuesta ante la crisis sanitaria, y luego han aplicado una ambivalencia de cierres parciales o totales y reaberturas sociales, que expresa una tensión entre los imperativos económicos y la salud pública. La pandemia generó El punto de equilibrio ante los imperativos de orden social y económico sería aquel que impida el colapso de los sistemas de salud y de la economía. De hecho, la llamada

“nueva normalidad” nos tendría que hacernos cuestionar qué no queremos conservar de la anterior “normalidad”.

Hay un problema incluso más serio que atañe a la región. Desde hace décadas, pero ciertamente con mucha saña luego de que varios gobiernos progresistas fueron depuestos por vía electoral o ilegítima en los últimos años, los derechos de los trabajadores han sido minimizados. Las políticas neoliberales lograron precarizar e informalizar el trabajo a gran escala, con regresiones en materia de derechos laborales que incluso lesionan derechos adquiridos en el comienzo de la segunda postguerra mundial. En América Latina, cerca del 50 % de los trabajadores pertenecen al sector informal.

Boaventura de Sousa cuestiona el impacto de la cuarentena como consecuencia de la pandemia de SARS-CoV2 en trabajadores informales. “¿Qué implicará la cuarentena para estos trabajadores, que tienden a ser los primeros en ser despedidos cada vez que hay una crisis económica?

GRÁFICO 3. Evolución global de la IED, Remesas, Flujos de inversión de cartera en títulos de deuda y acciones, y AOD.



FUENTE: (Sayeh, 2020:18)

(...) La recomendación que hizo la OMS acerca de trabajar en casa y autoaislarse es impracticable, ya que obliga a los trabajadores a elegir entre ganar el pan de cada día o quedarse en casa y pasar hambre. (...) Las recomendaciones de la OMS parecen haber sido diseñadas con una clase media en mente, que es una pequeña fracción de la población mundial.” (De Sousa Santos, 2020: 48-49)

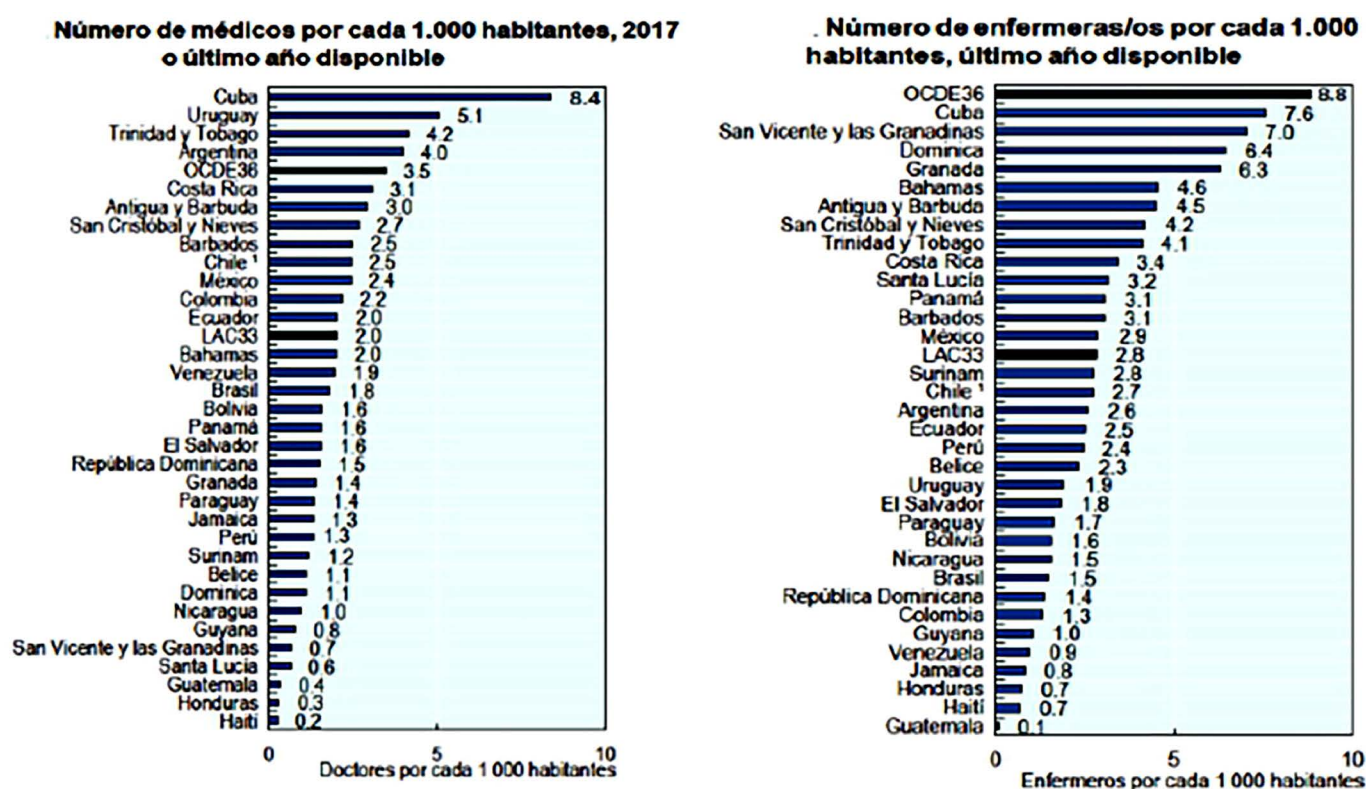
Lo cierto es que la acumulación de exclusiones sociales y derechos preteridos, y la reducción del papel del Estado como garante de los derechos sociales, en un proceso de “desciudadanización por mercantilización y desposesión” (Basile, 2020: 31), ha reabierto y profundizado la brecha entre los sectores de mayores y menores ingresos. Las estadísticas que a diario presentan la tasa de contagios y decesos tienen una naturaleza estructural y clasista. Cualquier ser humano es susceptible de contagio, pero el empobreci-

miento y las condiciones de vida al que una parte importante de las sociedades ha sido conducida, aumenta la posibilidad de que la mayoría de los casos se produzcan precisamente entre los sectores con menores ingresos y menores posibilidades de acceder a prestaciones de salud. A mayor asimetría en términos de trabajo, recursos, y atención sanitaria, mayores son los riesgos y las probabilidades de contraer y fallecer por este nuevo coronavirus.

Téngase presente que los indicadores de salud permiten tener una idea de la capacidad que tienen los Estados para satisfacer la prestación de servicios en ese sector. Sin embargo, hay que añadir que hay otros indicadores relacionados con las condiciones cotidianas de vida de los ciudadanos de cada país. Tratándose de una enfermedad contagiosa que ataca la inmunidad de las personas y que lesiona severamente el sistema respiratorio, hay otras cuestiones de índole

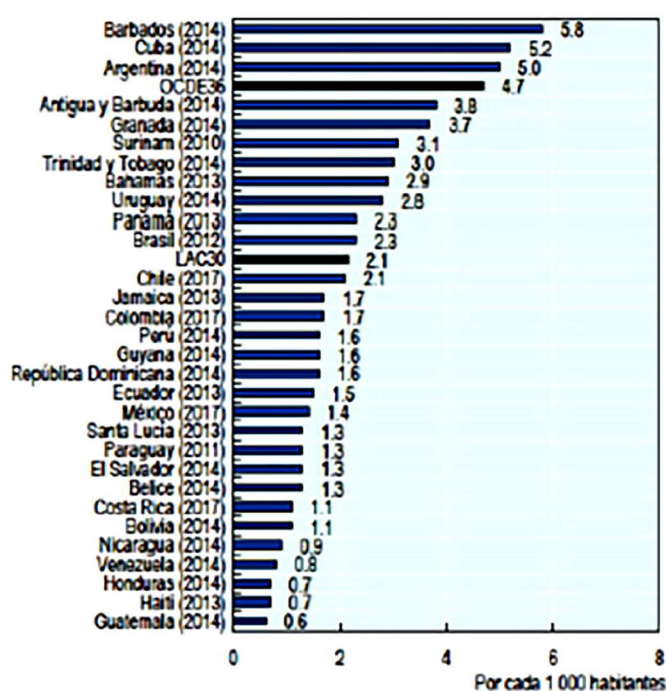
TABLA 2 (PARTE 1) Cantidad de profesionales de la salud y camas hospitalarias por cada 1000 habitantes.

Gasto en salud per cápita y como porcentaje del PIB, en países de América.



FUENTE: (OECD/The World Bank, 2020: 121,127 y 139)

Número de camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, último año disponible



FUENTE: (OECD/The World Bank, 2020: 121,127 y 139)

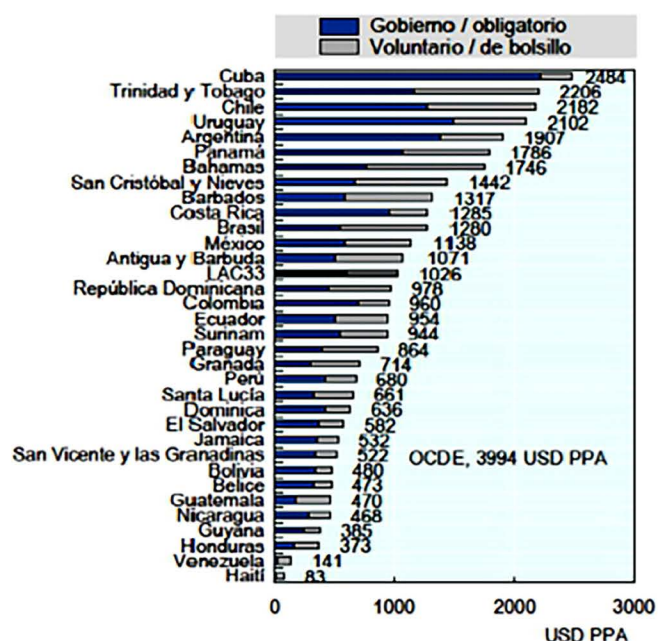
TABLA 2 (PARTE 2) Cantidad de profesionales de la salud y camas hospitalarias por cada 1000 habitantes.

Gasto en salud per cápita y como porcentaje del PIB, en países de América.

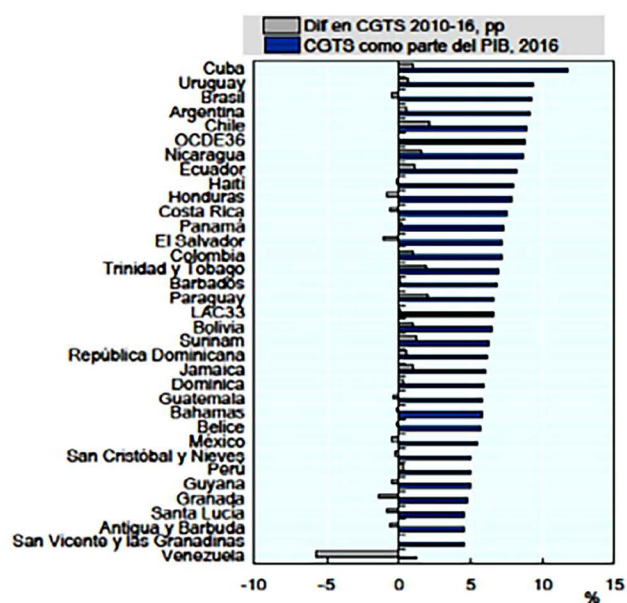
TABLA 2 (PARTE 3) Cantidad de profesionales de la salud y camas hospitalarias por cada 1000 habitantes.

Gasto en salud per cápita y como porcentaje del PIB, en países de América.

Gasto total en salud per cápita, (USD PPA), 2017



Cambio en el gasto total de salud como porcentaje del PIB, 2010-2017



FUENTE: (OECD/The World Bank, 2020: 121,127 y 139)

socio-económicas que tributan a generar un mayor o menor grado de vulnerabilidad. Las condiciones de hacinamiento o no, que están vinculadas al área del espacio habitable, la cantidad de personas que comparten ese espacio y hasta la ventilación (Ver Tabla 3).

EL CORONAVIRUS: ¿(DES) ACELERADOR DE LOS PROCESOS POLÍTICOS?

Para controlar los niveles de contagio, la gran mayoría de los Estados acudieron a declarar estados de excepción, restringiendo con ello la movilidad social, y empleando para ello a las fuerzas policiales e incluso militares. Se comprende que cualquier gobierno ampare la legalidad y legitimidad de sus actuaciones empleando disposiciones que forman parte del marco jurídico de cualquier país y que limitan el ejercicio de determinados derechos constitucionales para preservar la integridad de su sociedad. A fin de cuentas, se trata de preservar el derecho más elemental: el derecho a la vida.

Si bien es cierto que las medidas de excepción permiten ejercer el control social para garantizar el orden y evitar el contagio propio de la pandemia, pueden tener un empleo diferente para el

que fueron concebidas. En plena efervescencia de las movilizaciones de protesta por las condiciones de inequidad social, la aparición de la pandemia del Sars.Cov2 en América Latina interrumpió las dinámicas sociales y funcionó como factor momentáneo de desmovilización grupal.

El extraordinario avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC's) y su empleo masivo por una buena parte de la humanidad, permite la construcción de redes sociales en espacios virtuales. Como quedó demostrado desde la "Primavera Árabe", y más recientemente en las "revoluciones de color" en Europa del Este y el espacio post-soviético, la definición de las agendas de protestas, así como la coordinación de las mismas, ha sido en buena medida posible en plazos relativamente breves gracias a las TIC's. Algo similar sucede con los movimientos de protesta social latinoamericano, que privado coyunturalmente de ocupar los espacios territoriales, se ha mantenido en un estado de latencia. De hecho, en la misma medida en que por la presión de las economías los gobiernos acceden a derogar total o parcialmente las medidas de confinamiento social, ya comienzan a reaparecer las movilizaciones sociales, particularmente en

TABLA 3. Población latinoamericana y caribeña según cantidad de personas y porcentajes. (2020)

América Latina y Caribe	En cantidad de personas	En porcentaje (%)
Población urbana	503,2 millones	80%
Población sin acceso a Agua potable	223,5 millones	35%
Población en Hacinamiento	S/D	S/D
Población mayor de 65 años	56,6 millones	9%
Población en situación de Pobreza	191 millones	30.80%
Población en situación de Pobreza Extrema	72 millones	11.50%

FUENTE: (Basile: 2020: 26)

Colombia, con duros cuestionamientos hacia el gobierno de Iván Duque y a menguante la influencia política que aún tiene el ex presidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez. Pero también en Chile la población vuelve a las calles para presionar por el Plebiscito que debe dar paso a la convocatoria de una Asamblea Constituyente. También en Ecuador ha sido la presión de la movilización popular que resurge (después del catastrófico impacto que tuvo el inicio de la pandemia en Quayaquil), la que en buena medida logró que fuera reconocida la nueva propuesta electoral que agrupa a los partidarios del correísmo. E incluso en Bolivia, donde luego de ganar las elecciones para la presidencia, vicepresidencia y legislativo, el Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), dependerá para su consolidación de la movilización popular para defender el voto, en un entorno en el que las fuerzas retrógradas de las Juventudes Cruceñistas y otros grupos afines en intereses regionales o ideológicos pretenden desconocer el resultado.

La percepción social de lo positiva o negativa que haya sido la administración de la crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV2, en conjunción con el impacto de las crisis económica, social y política (preexistentes y acumuladas en época de pandemia), puede tener una influencia relevante en la nueva reconfiguración de las cuotas de poder en los ámbitos legislativo y ejecutivo en varios países. Incluso en la emergencia de nuevas y vigorosas fuerzas políticas que disputen los espacios públicos y el escenario político. No hay que menospreciar un detalle: buena parte de los costos de estas múltiples crisis se han transferido precisamente a los sectores menos favorecidos, pero también a la clase media. Y esto puede ser un revulsivo poderoso para que las sociedades decidan tener más control de las agendas de políticas públicas.

Una de las cuestiones que ha quedado bajo el escrutinio público es que la aplicación de políticas económicas que reducen el papel del Estado. Las garantías materiales para el ejercicio de los derechos sociales, no pueden ser transferidas a un sec-

tor privado que obra discrecionalmente tomando como horizonte la rentabilidad económica. El haber privatizado buena parte de los servicios de salud al sector privado, pauperizando la prestación de estos servicios en el sector público, ha mostrado una negligencia criminal y una actitud omisa ante desafíos de esta naturaleza. Quizás el caso más notorio es el comportamiento del gobierno de Jair Bolsonaro, que ha llegado incluso a rechazar la adquisición de decenas de millones de dosis de una de las vacunas de origen chino por su supuesta poca fiabilidad.

LA GEOPOLÍTICA DE UNA PANDEMIA

Aunque hay en América Latina una capacidad científica y biotecnológica, que ha estado trabajando para encontrar nuevos métodos de diagnóstico e incluso la obtención de vacunas propias que sirvan como terapia y prevención de la enfermedad, esta no es lo que predomina en el escenario regional. De hecho, al momento de escribir este artículo Cuba es el único país del subcontinente latinoamericano y caribeño que ha inscrito dos candidatos vacunales. Y aunque resultan prometedores y cumplen rigurosamente las fases de prueba para su posterior uso en seres humanos, sus calendarios de prueba le ubican en relativa desventaja temporal frente a los candidatos vacunales de la Federación Rusa, la República Popular China y de la que desarrollan la firma AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

La campaña de desinformación mediática que siguió al anuncio por Vladimir Putin de que Rusia disponía de la vacuna Sputnik V y que esta había avanzado en su fase de ensayos clínicos, fue tan fuerte que las especulaciones llegaron incluso a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Luego de cumplimentar las formalidades necesarias, que incluían la entrega de la información concerniente a sus avances, fue que la Federación Rusa incluyó su primer candidato vacunal en un ensayo que abarcaba decenas de miles de voluntarios de otros países. Parece ser que, pese a las animadver-

siones, tanto China como Rusia serán de los más importantes suministradores de vacunas contra el coronavirus en el mercado latinoamericano, que como unidad subcontinental es el territorio más afectado por el coronavirus.

No obstante, Latinoamérica carece de una estrategia articulada a escala regional para contener y mitigar el impacto del SARS-CoV2. Se pensará que este es un ejercicio de criterio poco pertinente y maximalista. Incluso alguien pudiera pensar que, si la sólida institucionalidad comunitaria europea no ha podido funcionar de manera concertada frente a este reto, sería un sinsentido proponerse hacerlo para América Latina. Pero Latinoamérica tiene la urgencia de hacerlo. Posee la mayor cantidad de contagios y fallecidos en una zona geográfica. Los límites a los recursos nacionales que cada Estado latinoamericano tiene por separado, refuerzan la necesidad de una coordinación de políticas públicas a escala regional. Sólo un enfoque de cooperación e interdependencia, en el marco de los esfuerzos globales para enfrentar la pandemia, es quizás la única opción viable para integrar recursos financieros, científicos y tecnológicos. Aunque la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha colaborado de forma eficaz proveyendo asesoría, se nota la carencia de una institución como la UNASUR, y el estancamiento de la CELAC.

La Unidad de Inteligencia que pertenece al mismo conglomerado de la revista *The Economist*, identifica claramente que la pandemia del SARS-CoV2 se ha convertido en un catalizador de procesos que ya se venían expresando con anterioridad y de forma más sutil. Una parte de ellos tienen que ver con la evolución futura de la economía: crecimiento muy moderado con probables crisis de deuda soberana. Sin embargo, el énfasis estaría en el reforzamiento del rol de la República Popular China como actor global (incluso con áreas de influencia en distintas zonas geográficas) y en

el debilitamiento del liderazgo global de Estados Unidos. (The Economist Intelligence Unit, 2020) El manejo exitoso de la pandemia en su territorio y su oferta de cooperar con otros Estados en materia de insumos médicos, ayuda económica y vacunas, hace que muchos países vean a China como un socio más confiable y asertivo que Estados Unidos, especialmente en la era Trump.

CONCLUSIONES

La pandemia SARS-CoV2 se ha convertido en un catalizador de una crisis múltiple en América Latina. Aun cuando en un futuro no lejano logre ser contenida su expansión y mitigados sus efectos en materia de salud, las repercusiones en materia económica y social serán de larga duración. Quizás sea posible la recuperación de la actividad económica en el corto plazo. Pero esto pasará por una intensa reorganización de la estructura laboral y de la actividad productiva y tendrá efectos muy negativos en el empleo. No será fácil reducir los indicadores de desempleo y pobreza.

En el terreno político, la crisis sanitaria tendrá impactos profundos. Quienes hayan gestionado desastrosamente la crisis provocada por el coronavirus, sin mostrar la diligencia que se espera de un gobierno para proteger a sus ciudadanos de manera eficaz, asumirán un alto costo político. No es descartable que en medio de los cambios que vendrán, varios de los gobiernos que más se destacaron por sus políticas de privatización sean sustituidos en el corto plazo. Tampoco hay que subestimar el enorme reto que tendrán que asumir los gobiernos que tendrán que hacerse cargo del desastre.

El siglo XXI está en un punto de inflexión. Aún no sabemos con certidumbre hacia dónde vamos, ni cuán profundos sean los cambios sociales. Todo parece indicar que la pandemia ha venido a confirmar el declive de Estados Unidos como potencia hegemónica global.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Basile, G. (Marzo 2020): *Coronavirus en América Latina y Caribe: entre la terapia de shock de la enfermología pública y la respuesta de la salud colectiva/salud internacional Sur Sur*. IV Dossier de Salud Internacional Sur Sur. Grupo de Trabajo Salud Internacional CLACSO.
- CEPAL (2019): *Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe*, Santiago de Chile: Naciones Unidas, Obtenido de https://www.cepal.org/sites/default/files/pr/files/cuadro_perspectivas_comercio_2019.pdf
- CEPAL (2020): *Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)*, Santiago de Chile: Editorial de las Naciones Unidas.
- De Sousa Santos, B. (2020): *La cruel pedagogía del virus*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.
- Le Quang, M., N. Chávez & D. Vizuite (2020): "El octubre plebeyo: cronología de doce días de movilización social", en D. A. al & D. Andrade, *Octubre y el derecho a la resistencia: revuelta popular y neoliberalismo autoritario en Ecuador*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.
- OECD/The World Bank (2020): *Panorama de la Salud: Latinoamérica y el Caribe 2020*, Paris: OECD Publishing.
- Ospina Peralta, P. (2020): Ecuador contra Lenín Moreno, en B. e. De Sousa, *Ecuador la insurrección de octubre*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.
- Rodríguez Pinzón, E. (Enero de 2020): *Colombia 2020: la movilización social como reflejo y oportunidad del cambio*. Madrid: Fundación Carolina.
- Sayeh, A. (Junio de 2020): Una forma de sustento en peligro. *Finanzas y Desarrollo*, 57(2).
- The Economist Intelligence Unit*. (2020): *Geopolitics after Covid-19: is the pandemic a turning point?*